



CIUDADANÍA Y VALORES
FUNDACIÓN

Chile: el país diferente

Cristián Pizarro Allard y Joaquín García-Huidobro

Noviembre 2011



La Fundación Ciudadanía y Valores como institución independiente, formada por profesionales de diversas áreas y variados planteamientos ideológicos, pretende a través de su actividad crear un ámbito de investigación y diálogo que contribuya a afrontar los problemas de la sociedad desde un marco de cooperación y concordia que ayude positivamente a la mejora de las personas, la convivencia y el progreso social

Las opiniones expresadas en las publicaciones pertenecen a sus autores, no representan el pensamiento corporativo de la Fundación.

Sobre los autores:

Cristián Pizarro Allard; Bachiller en Ciencias Políticas, Diplomado en relaciones Internacionales y PS en Lobby & Advocacy, IE Busines School.- Además de autor de numerosos artículos y trabajos en temas de comunicación y asuntos públicos.

Joaquín García-Huidobro; Doctor en Filosofía y Profesor de Ética y Filosofía Política, Universidad De Los Andes, además de columnista del Diario El Mercurio.

CHILE: EL PAÍS DIFERENTE

En Brasil dimiten los ministros por corrupción y en Argentina el gobierno hace esfuerzos para evitar el alza galopante del dólar. Otros países latinoamericanos tienen problemas semejantes. En Chile, por el contrario, los ministros son respetados empresarios o académicos que han abandonado una exitosa actividad privada para dedicarse al servicio público; el dólar y el euro bajan, la inversión y la productividad crecen, y se han creado medio millón de empleos desde que Piñera asumió el gobierno. Sin embargo, brasileños y argentinos están contentos, mientras que los chilenos se muestran irremediabilmente pesimistas. Definitivamente, parece que Chile es un país raro. En las páginas que siguen queremos hacer un poco de historia, y mostrar por qué un país que es mirado con envidia por sus vecinos enfrenta hoy algunas dificultades inesperadas.

No hay paz que dure cien años

En el siglo XIX, la tónica general de las naciones hispanoamericanas tras la independencia fue la inestabilidad, el caudillismo, las dictaduras y las revoluciones. Chile, en cambio, alcanzó la estabilidad muy pronto, en 1830, por la vía de instaurar un régimen presidencial fuerte, una suerte de monarquía electiva. A pesar de ser un país pobre, tuvo 60 años de orden, gobernado primero por conservadores y luego por liberales, que le permitieron progresar económicamente y atraer intelectuales de todo el continente, que contribuyeron a su desarrollo cultural. Las disputas entre católicos y laicistas, aunque enconadas, no fueron suficientes para turbar el orden. Tras un par de guerras contra Perú y Bolivia acrecentó significativamente su territorio, incorporando vastas regiones en el norte, ricas en nitrato y cobre. A partir de 1861, los gobiernos liberales iniciaron la llamada “pacificación de la Araucanía”, destinada a someter a los belicosos mapuches, privándolos de parte de sus tierras y recluyéndolos en reducciones.

Este período de relativa estabilidad, que muchos chilenos miran con nostalgia fue seguido por un siglo XX particularmente agitado. La riqueza fácil obtenida gracias al nitrato no se tradujo en un mejoramiento de las condiciones de toda la población. La cuestión social tuvo una especial fuerza y se vio acompañada por el temprano surgimiento de un partido comunista (uno de los más antiguos del mundo) y otras agrupaciones muy radicalizadas. Además, fue una de las naciones más profundamente afectadas por la crisis de 1929. Los conflictos no fueron mayores gracias a la acción del Partido Radical, una agrupación laicista de inspiración socialdemócrata que reunía principalmente a personas de clase

media. Este partido, a pesar de su nombre, desempeñó un papel moderador, y permitió que la izquierda no marxista gobernara largos años, imponiendo un Estado de bienestar fuertemente proteccionista.

A partir de la década del 50, el Partido Radical perdió fuerza, y su lugar fue llenado por otras agrupaciones, fuertemente ideologizadas. En la izquierda, el Partido Comunista (de inspiración staliniana) y el Socialista llegaron a contar con un tercio de la fuerza electoral. El socialismo se fue radicalizando hasta que, a mediados de los sesenta, llegó a proclamar la legitimidad de la revolución armada, sin perjuicio de seguir participando en la “democracia burguesa”, como despectivamente la llamaba, con el fin de cambiarla desde dentro. La influencia de la izquierda también se hizo sentir en la Democracia Cristiana, que, a diferencia de sus congéneres europeas, es un partido de centroizquierda. De hecho, a partir de 1965 aplicó una Reforma Agraria muy amplia, que llevó a estatizar gran parte de la agricultura nacional. Dicho de manera sencilla, la Democracia Cristiana aplicó el socialismo en el campo y el capitalismo en la ciudad, fomentando el desarrollo de la industria nacional a través de fuertes medidas proteccionistas, inspiradas en las propuestas de la CEPAL (la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de la ONU).

Atendida la tradición democrática y el apego a la legalidad de los chilenos, la izquierda de inspiración marxista propuso, ya a partir de 1958, que Chile debía alcanzar el socialismo por medios pacíficos. Tras diversos intentos, este objetivo fue conseguido en 1970 por Salvador Allende, que propuso un socialismo “a la chilena, con sabor a empanadas y vino tinto”.

En Europa y los Estados Unidos, el Presidente Allende era visto como un socialdemócrata, pero él y los partidos que lo apoyaron nunca ocultaron su adhesión al marxismo leninismo. Solo diferían del modelo cubano en el carácter legal que pretendían dar a su camino hacia el mismo modelo de sociedad que se estaba instaurando en Cuba. Esto lo sabían los chilenos que votaron por él, lo que constituye una muestra adicional de la singularidad de los habitantes de ese país.

El gobierno de la Unidad Popular, conducido por Salvador Allende, consistió en una coalición de socialistas, comunistas y otros grupos menores, también inspirados por el marxismo. Nacionalizó el cobre y las comunicaciones, terminó de estatizar la agricultura, instaurando unas granjas colectivas (“asentamientos campesinos”) subsidiadas por el Estado, y comenzó a expropiar una tras otras las principales industrias y la banca, así como las tierras, todo ello sin indemnización previa. Chile se llenó de “asesores” cubanos, checos y de otros países de más allá de la Cortina de Hierro, y contó con un generoso

apoyo soviético. En el marco de la Guerra Fría, el experimento socialista chileno revestía un enorme interés para la Unión Soviética, porque no despertaba el temor de la vía cubana y, atendida la influencia intelectual de Chile en la región, era fácilmente exportable al resto de Latinoamérica.

En un principio, Allende respetó la educación privada y la prensa, pero, tras una visita de Fidel Castro en 1971, que se prolongó por un mes, el Gobierno empezó a dar pasos decididos para poner en marcha un plan para estatizar la educación a través de una Escuela Nacional Unificada, que apuntaba a una “sociedad socialista, humanitaria y pluralista”, lo que le valió el rechazo de la Iglesia Católica y de los propios estudiantes. También hubo variados intentos de limitar la libertad de prensa, particularmente por la vía de controlar la producción y venta de papel. Asimismo, el Gobierno no respetó el pacto político conocido como “Estatuto de Garantías”, que Allende debió firmar con la Democracia Cristiana para obtener su apoyo en el Congreso y que incluía una serie de compromisos que finalmente no se cumplieron.

Por otra parte, las medidas económicas llevaron a la escasez de pan, carne, leche y demás productos alimenticios. Esta situación, sumada a un proceso hiperinflacionario terminó por hacerlo perder gran parte del apoyo popular. Para conseguir un kilo de pan había que hacer una fila de una o dos horas (las famosas “colas”). Esto terminó por exasperar especialmente a las mujeres. Gran parte de los productos tenía precio fijo, lo que llevó a que bajara la producción, y muchos de ellos solo se conseguían en el mercado negro. El proceso de estatización de la economía significó una constante ruptura de la legalidad, lo que condujo a que en 1973 tanto el Congreso como la Corte Suprema declararan que el gobierno de Salvador Allende había violado reiteradamente la Constitución y las leyes. Huelgas de transportistas, mineros, estudiantes, y la radicalización de la ultraizquierda, fueron nuevos ingredientes que dejaron al país cerca de la guerra civil o de la intervención militar. La violencia se transformó y validó como un arma política habitual en la vida de entonces, utilizada especialmente para ocupar los campos, la minoría (33%), que aún no habían sido expropiados. Tampoco faltó un pequeño grupo antimarxista que comenzó a llevar a cabo actos de terrorismo. En una medida desesperada, Allende nombró varios ministros uniformados, lo que significó la ruptura de una arraigada tradición chilena, que indicaba que los militares no eran deliberantes.

El paso para la intervención militar estaba dado y, tras muchas presiones de los partidos de oposición y de la mayor parte de los ciudadanos, las Fuerzas Armadas se decidieron a intervenir el 11 de septiembre de 1973. La imagen del palacio presidencial “La Moneda” en llamas recorrió el mundo, lo mismo que la noticia del suicidio del presidente Allende.

17 años de gobierno militar

No solo Allende murió en ese entonces. 2.279 personas fallecieron en enfrentamientos con los militares o pasaron a engrosar el tristemente célebre grupo de los “desaparecidos”. La tradición hispánica y prusiana, que formaron el ejército chileno, indicaba que, cuando había un enfrentamiento o se fusilaba a alguien, debía quedar constancia del hecho y los cadáveres debían ser enterrados en un lugar perfectamente reconocible. Sin embargo, en los años sesenta y setenta, los militares chilenos recibieron entrenamiento en los Estados Unidos sobre la forma de enfrentar la lucha antisubversiva. Y una de las reglas fundamentales era aquí que no debían quedar rastros. Concretamente, había que hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas. Esta era una práctica que, a su vez, los instructores norteamericanos habían aprendido de la lucha de los franceses en Argelia.

Si bien la amenaza subversiva fue muy real, la forma en que fue combatida traspasó con creces las fronteras de lo aceptable. El nuevo gobierno organizó una Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que, con gran autonomía, tomó sobre sus hombros la tarea de combatir la subversión. Organismos parecidos realizaban entonces la misma tarea en Argentina y Uruguay. La jerarquía católica se opuso fuertemente a la forma en que se llevaba a cabo la lucha contra los extremistas de izquierda, y organizó todo un sistema para la defensa jurídica de las víctimas de violaciones de derechos humanos, la Vicaría de la Solidaridad. Lamentablemente, gran parte de los abogados que intervinieron en esas funciones eran personas muy comprometidas con la izquierda, e incluso con una clara afiliación marxista, lo que hizo perder credibilidad a estas denuncias a los ojos de los sectores más conservadores.

La vía del Gobierno Militar para los líderes políticos marxistas que no estaban involucrados en actos subversivos fue el exilio. Gran parte de ellos tuvo que viajar forzosamente a Suecia, Alemania Oriental u otros países, y muchos miles de chilenos eligieron el exilio voluntario. En la mayoría de los casos, impulsados por su discrepancia con el nuevo régimen; en otros, movidos por la oportunidad de aprovechar las generosas condiciones que ofrecían países como Suecia, que permitían una vida muy superior a la que habrían tenido en Chile. Este factor del exilio tuvo un efecto inesperado, porque en el contacto

con la izquierda europea los exiliados modificaron profundamente su pensamiento, lo que los llevó a abandonar el marxismo y el interés por la lucha armada. Además, muchos de ellos estudiaron en buenas universidades y alcanzaron una calificación intelectual de la que los funcionarios del gobierno de la Unidad Popular habían carecido.

El nuevo Gobierno consideró desde un principio que su misión no era simplemente restaurar la legalidad y llamar a elecciones periódicas. Esto lo hizo no solo porque el país estaba económicamente destruido, afectado por la hiperinflación, graves problemas de pobreza y con una estructura productiva agrícola e industrial desmantelada. La honda división política, que aún se mantenía, y la ineficacia del régimen constitucional, que no pudo impedir que fuerzas contrarias a la democracia emplearan sus herramientas para destruirla, exigían una reforma muy profunda y largo tiempo en el poder: “metas y no plazos”, señalaron cuando se les preguntó por la duración que iba a tener el nuevo régimen.

De este modo, muy pronto perdió el apoyo de la cúpula de la Democracia Cristiana, que, en su mayoría, en un primer momento había apoyado la intervención militar con entusiasmo y la había defendido en el extranjero, pero que mantenía la esperanza de volver pronto a gobernar el país.

En un principio, los Comandantes en Jefe de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas pensaron en un gobierno más bien colegial, con una presidencia rotativa, pero muy pronto llegaron a la conclusión de que debían nombrar Presidente de la República al General Augusto Pinochet. Aunque era el último que había decidido sumarse al derrocamiento de Allende, se trataba de la persona con mayor carisma y liderazgo, y además representaba al Ejército, la fuerza más antigua y numerosa.

Se puso en marcha, entonces, una amplia reestructuración del Estado y, a partir de 1975, una reforma económica de orientación neoliberal. Esto fue una novedad en la época, no solo porque los gobiernos militares siempre han ampliado el tamaño y poder del Estado, y este buscaba disminuirlo, sino porque nadie hablaba por entonces en Latinoamérica de mercados libres, ya que la moda era el manejo estatal de la economía y el proteccionismo. Chile se retiró del Pacto Andino y, en vez de seguir esquemas de mercado común, estableció aranceles bajos y parejos y abrió su economía al mundo. Al mismo tiempo fomentó las exportaciones. Disolvió las granjas colectivas y asignó la tierra a los campesinos y, en parte, a los antiguos propietarios, de modo que la producción agrícola creció rápidamente.

Los años de ajuste fueron muy duros, porque las industrias que habían crecido amparadas por el proteccionismo eran muy ineficientes y no pudieron resistir la competencia externa.

Se perdieron puestos de trabajo y hubo que pagar un fuerte “costo social”, como decían los Obispos, que fueron fuertes críticos del nuevo sistema, muy ajeno al socialismo comunitario del que ellos habían sido partidarios en la última década.

Con todo, pronto se empezaron a ver resultados interesantes. El más notable fue que, aunque siempre se había pensado que los chilenos no tenían gran talento empresarial, el país se llenó de emprendedores y mostró un enorme dinamismo. Este fenómeno se transformó en una fuente de orgullo nacional. Quizá los chilenos no podían jugar fútbol tan bien como argentinos, uruguayos y brasileños, pero sí podían hacer buenos negocios. Se reformó la previsión, introduciendo un sistema de capitalización privada que luego ha sido imitado en todo el mundo, se terminó el endémico problema de la desnutrición infantil, y se privatizaron casi todas las empresas estatales con un sistema de “capitalismo popular”. Llegó la inversión extranjera, atraída por esas condiciones favorables, y el país experimentó una notable bonanza. Las voces críticas no eran atendidas: “el éxito no necesita explicaciones”, se decía. Como la actividad político partidista estaba proscrita, los chilenos se concentraron en la economía y la actividad privada.

En 1981 se reformó el sistema de educación superior, permitiendo la creación de universidades privadas, lo que ha significado un crecimiento exponencial del número de chilenos que acceden a la educación superior. Poco antes se había reformado la educación básica y media, haciéndola depender de las Municipalidades (Ayuntamientos), lo mismo que gran parte de la salud. El gran sistema de salud pública dejó lugar a un sistema de seguros privados, al que accedieron fundamentalmente los sectores medios y altos.

La situación de bonanza se mantuvo hasta la crisis económica de 1982-3. La baja del precio del cobre, su principal exportación, más el alza del petróleo y de las tasas de interés internacionales pusieron fin a la situación idílica que había vivido el Gobierno, y trajeron a los chilenos de vuelta a la realidad. Con la crisis llegó la política, y el Gobierno ya no pudo restringir la acción de los partidos.

Comenzaron entonces las protestas sociales y se fue produciendo la unidad de la oposición, que, liderada por la democracia Cristiana, incluyó también a diversas agrupaciones de izquierda, particularmente a aquellos sectores que, tras la experiencia del exilio, se habían renovado.

Poco antes de la crisis se había aprobado una nueva Constitución (1980), que, junto con limitar el ámbito de acción del Estado, particularmente en la economía, aseguraba autonomía al Banco Central, garantizaba decididamente la propiedad privada, y establecía un cronograma muy preciso para el fin del Gobierno Militar. Dicho con otras palabras, se seguía el modelo romano de dictadura, limitado por el tiempo en que se prolongara la

emergencia. Todo el debate de entonces consistió en el empeño de la oposición por acelerar esos plazos, y el del Gobierno por mantener su proyecto original.

El fin de la crisis económica y el comienzo de un periodo de gran crecimiento económico fortaleció al régimen. Al mismo tiempo, el recrudecimiento de la actividad subversiva hizo ver a los chilenos que el marxismo seguía siendo un peligro real, lo que también contribuyó a los intereses de los militares. Finalmente la oposición decidió jugar dentro de las reglas existentes, que indicaban que en 1988 se realizaría un plebiscito para aprobar o rechazar al candidato que propusiera el Gobierno, y en caso de negativa se llamaría a elecciones generales. Así fue, y Augusto Pinochet fue derrotado, aunque obtuvo un significativo 43% de los votos. Un año después asumía el demócratacristiano Patricio Aylwin, al mando de una coalición que integraban también socialistas y socialdemócratas. El plan del Gobierno Militar se había cumplido, aunque los actores de la trama ya no eran los previstos. Un elemento que influyó en que el proceso de término del Gobierno fuera particularmente pacífico fue la visita a Chile de Juan Pablo II, que movió en los chilenos un genuino espíritu de reconciliación.

20 años de tranquilidad

Los temores de inestabilidad se mostraron infundados y el nuevo Gobierno se mostró particularmente exitoso, por tres razones. La primera es que la izquierda había aprendido la lección y moderó sus pretensiones. Además, Augusto Pinochet se mantuvo como Comandante en Jefe del Ejército, lo que significó un incentivo para evitar acciones que pudieran significar una ruptura muy significativa. El segundo factor propicio residía en la renovación de buena parte de la izquierda. Ya no se trataba de jóvenes barbudos que pronunciaban encendidos discursos revolucionarios, sino de hombres bien vestidos, formados en las mejores universidades y sinceros partidarios de la democracia. La caída del Muro de Berlín contribuyó a fortalecer estas posturas y a desacreditar al marxismo tradicional. Finalmente, más allá de la retórica electoral, la Concertación de Partidos por la Democracia, nombre de la coalición que a partir de entonces gobernaría Chile durante 20 años, mantuvo bastante inalterado el modelo económico de los militares.

Así las cosas, la inversión económica siguió fluyendo con generosidad y Chile continuó mostrando el dinamismo empresarial que llevó a que se realizaran importantes inversiones chilenas en todo el Continente, lo que habría sido impensable 30 años atrás. Un buen precio del cobre y una oposición muy amigable facilitaron aún más las cosas. Aylwin fue seguido por Eduardo Frei, otro demócratacristiano, hijo del Presidente del

mismo nombre que precedió a Salvador Allende. Después vinieron los socialistas, con Ricardo Lagos, primero, y finalmente Michelle Bachelet.

Durante los 20 años de gobierno de la Concertación, la política se tornó aburrida, pero eso era precisamente lo que buscaban los chilenos. Ya no tenían que temer grandes vaivenes ni corrían el riesgo de perder sus propiedades o libertad. De pronto, todos estaban de acuerdo en las cosas que antes los dividían. Los empresarios vieron, con sorpresa, que ganaban más dinero que nunca. A pesar de que no se introdujeron grandes y nuevas reformas modernizadoras, la estabilidad política y económica dio origen a un clima muy adecuado para el bienestar económico. Los que no estuvieron tan contentos fueron los militares. Muchos de ellos fueron sometidos a juicios por violaciones a los derechos humanos, aunque se trataba de hechos ocurridos hacía décadas, y en los informes oficiales sobre violencia política solo se incluía la que había provenido de su parte, sin considerar la acción de los grupos de extrema izquierda ni tener en cuenta las circunstancias anormales que habían explicado su intervención. Pero nadie estaba interesado en alzar su voz a favor de los uniformados: ellos ya habían cumplido su misión a la hora de derrocar a Allende y modernizar el país, ahora se transformaban en una carga incómoda, que nadie quería llevar.

¿En qué se tradujo el paso del predominio demócratacristiano a la hegemonía de los socialistas en la Concertación? Lo primero y más sorprendente es que estos fueron mucho más ortodoxos a la hora de mantener el modelo de economía de mercado. La segunda diferencia fue el aumento de la corrupción, aunque ya se había mostrado como un fenómeno preocupante en los gobiernos iniciales de la Concertación. La corrupción en Chile no tiene nada que ver con la que se da en otros países de la región. Presidentes y ministros viven sobriamente y son muy raros los casos en que una autoridad de primer nivel se ha enriquecido a costa del interés público. Pero en los niveles medios o comunales sí se apreció un deterioro creciente en la ética pública.

La tercera diferencia fue un notorio incremento en el proceso de secularización. Los programas oficiales, si bien no eran directamente contrarios al cristianismo, empezaron a mostrar signos preocupantes en esa dirección. El modelo español fue considerado como el ejemplo que había que seguir, si bien despojado de la virulencia de los socialistas ibéricos. La experiencia de la Concertación de centroizquierda fue, en muchos aspectos, exitosa, pero dejó importantes tareas pendientes. A pesar del crecimiento económico, en Chile subsisten graves desigualdades, que si bien son inferiores a las de casi todos los países latinoamericanos, no resultan justificables para el Primer Mundo al que Chile aspira ingresar en los próximos años. Otro tanto cabe decir de la educación, particularmente la

pública, que tiene muchas deficiencias y condena a gran parte de sus alumnos a no poder llegar a las mejores universidades. Por último, el gobierno de centroizquierda no logró plantear un modelo que compatibilice adecuadamente las necesidades de crecimiento económico con el cuidado del medioambiente. A todo lo anterior hay que agregar el problema del déficit poblacional, que no ha sido advertido por ningún gobierno en el último medio siglo y que constituye una grave amenaza para el futuro.

Durante estos 20 años de gobiernos de la Concertación se dio una oposición política constructiva, con grandes acuerdos que fructificaron en el Senado de Chile: privatizaciones sanitarias y de puertos, reforma judicial y Corte Suprema, así como reformas constitucionales importantes para terminar con el período de transición, lo que incluyó el término de los llamados enclaves autoritarios. Se avanzó también en medidas anticorrupción y a favor de la transparencia, y se impulsó con fuerza el sistema de Concesiones, que abrió la participación del sector privado en las obras públicas.

Superhéroes en apuros

El natural desgaste de la coalición de centroizquierda explica, en buena medida, el triunfo electoral del empresario Sebastián Piñera en 2009, con una coalición liberal-conservadora. El solo hecho de que un millonario hubiera sido elegido Presidente de Chile es una muestra del cambio de mentalidad que ha experimentado el país.

La receta del nuevo Jefe de Estado fue sencilla: convocó a personas muy calificadas para formar el gabinete y los puso a trabajar en un “régimen de 24/7”, como dijo (24 horas al día los 7 días de la semana). Los currículos del equipo de gobierno inicial eran impresionantes y no desmerecían del de Sebastián Piñera, doctor en Economía, con notable desempeño en Harvard. En este gabinete, el Presidente prescindió casi completamente de los partidos políticos que lo apoyaron, y eligió apoyarse en técnicos y especialistas, muchos de ellos amigos suyos.

Pocos días antes de asumir el mando, Chile sufrió a comienzos de 2010 uno de los terremotos más grandes y amplios de la historia humana, lo que significó un desafío que gustosamente enfrentó el nuevo gobierno. El cambio fue impresionante, el país adquirió un nuevo ritmo y la oposición tardó muchos meses en ordenarse, remecida por interminables disputas internas y por la acción eficiente de las nuevas autoridades, que muy pronto se tradujo en un mayor crecimiento económico. En este ambiente de optimismo se llegó a la celebración del Bicentenario del proceso de emancipación, en septiembre de 2010, y el mundo presenció asombrado la hazaña del rescate de los 33

mineros sepultados en la Mina de San José, que apareció como un símbolo del nuevo modo de gobernar.

Parecía que en la vieja disputa entre Platón y Aristóteles, acerca de si los talentos del administrador y el político eran los mismos, la razón la llevara el primero: en pocos meses se había mostrado que los gerentes y técnicos habían dado un nuevo impulso al país.

La llegada de 2011 representó la venganza de Aristóteles. De un día para otro empezaron a aparecer situaciones incómodas para los administradores. Se trataba de viejos problemas, que los precedentes regímenes de centroizquierda no habían sabido o querido enfrentar, pero que, con manejo político, había sabido mantener sin que hicieran explosión. Primero fueron los debates en torno a una central hidroeléctrica en un lugar idílico en el sur del país. Aunque todos los cálculos económicos decían que su construcción era imprescindible para enfrentar las exigencias energéticas derivadas del crecimiento esperado para las próximas décadas, el público dijo otra cosa. Grandes protestas hicieron bajar la popularidad del Gobierno, que no supo hacer frente al problema.

A la cuestión ecológica se sucedieron las demandas de estudiantes. Con la centroizquierda en la oposición, las agrupaciones universitarias pasaron a estar compuestas por la izquierda y la ultraizquierda, de modo que el Gobierno no contó ahora con ningún aliado para hacer frente a las demandas estudiantiles. Sin experiencia política, cedió rápidamente a muchas de ellas y se quedó sin más cartas para negociar. Con el tiempo, las exigencias se volvieron cada vez más extremas y el movimiento estudiantil empezó a aglutinar a todos los que, por una u otra razón, estaban descontentos con el sistema. La popularidad del Gobierno alcanza hoy apenas al 31%, pero tampoco le va mejor a la oposición (14% de aprobación), de manera que ni siquiera cuenta con un interlocutor fuerte para negociar y alcanzar acuerdos durables.

Cuando un Gobierno está en apuros, lo que hace es recurrir a sus partidarios, pero el Gobierno del Presidente Piñera cometió, al menos, tres errores, que no le permitieron contar con ellos. El primero es que, desde el principio, hizo suya la tesis de Rodrigo Hinzpeter, ministro de Interior, en el sentido de que, tras un largo período de gobiernos centroizquierdistas, había que proceder de manera muy gradual y no debía el Gobierno imponer bruscamente su agenda de promoción de la iniciativa privada y modernización del Estado. Muchos sintieron que Sebastián Piñera era, en el fondo, un quinto gobierno de la Concertación, pues las medidas que iba tomando como Presidente eran distintas al discurso con el que había llevado a cabo su campaña. El segundo consistió en poner en marcha algunos proyectos que causaron la ira de sus electores más conservadores, particularmente un acuerdo de convivencia para parejas del mismo sexo y una ley contra

la discriminación muy favorable a los homosexuales. El tercer error, consistió en que, al conformar un gobierno de superhéroes, de gente hipercalificada, perteneciente al sector social más acomodado, el de los triunfadores en el sistema vigente, se enajenó la simpatía popular. Bachelet probablemente no fue una buena Presidenta, pero derrochaba cariño y hasta sus más enconados opositores la amaban. No sucede lo mismo con el nuevo equipo de Gobierno, a pesar de los cambios hechos hace unos meses, que significaron la inclusión de experimentados políticos en la conducción del país.

También fueron tres los factores que influyeron en que estas protestas estudiantiles tuvieran un éxito que no habían tenido las anteriores. El primero es que ganaron absolutamente la batalla comunicacional. Con gran ingenio y audacia coparon la radio, la TV y las redes sociales, presentando una cara simpática y atrayente, a la que no fue ajena la belleza de Camila Vallejos, la líder comunista de las protestas. En segundo lugar, el endeudamiento de las familias que tienen hijos en la universidad. En el sistema chileno, los alumnos deben pagar por los estudios superiores, también en las universidades públicas, aunque reciben créditos que devuelven, ellos o sus familias, una vez que egresan. En tercer lugar, el auge económico hace pensar a las personas que Chile podría tener un sistema educacional mejor y más barato, de modo que los ciudadanos se han puesto muy exigentes.

El Gobierno calculó que las protestas terminarían por desgastar el movimiento. Algo así ha ido sucediendo, pero muy lentamente. Recién en las últimas semanas se ha conseguido radicar las discusiones en el Congreso y no en la calle o en frustrados encuentros entre autoridades y estudiantes. Poco a poco se va recuperando la sensatez y el Gobierno se encuentra con políticos profesionales como interlocutores, para desesperación de los estudiantes, que ven que empiezan a perder protagonismo. Aunque muchos miles de estudiantes siguen en huelga, la mayoría a retornado a clases y logrará terminar el semestre. Solo algunas universidades públicas se encuentran en una situación delicada, ya que, a causa de las huelgas, han dejado de percibir los ingresos que vienen de los estudiantes. El público, por otra parte, ha empezado a reprobar la forma en que se han llevado a cabo las protestas estudiantiles, que han terminado en actos vandálicos y en 900 policías heridos en los últimos cinco meses. Recientes encuestas muestran que, por primera vez, la mayoría (57%) rechaza sus protestas, aunque comparte (67%) las demandas de más recursos para la educación con el fin de conseguir una mayor equidad. En el área económica, es destacable la cifra de un 5,2% de crecimiento en 2010, con un devastador terremoto a principios de año; y un 6,5% este año, según la proyección del

Fondo Monetario Internacional. Entre 1986 y 1997, el crecimiento fue de un 7,7%, en tanto en los gobiernos de Lagos y Bachelet alcanzó a un 3,3%.

Todas estas son buenas noticias para el Presidente Piñera y sus ministros. En las próximas semanas debería llegar a un acuerdo con la oposición, que permita aprobar el presupuesto para el año próximo con un aumento del gasto social, especialmente en educación, pero sin alterar la disciplina fiscal que ha caracterizado al país en las últimas décadas. Con todo, las interpretaciones sobre la actualidad política chilena son dispares. Algunos piensan que los chilenos se dan el lujo de estar descontentos precisamente porque saben que, en los grandes números, el país marcha bien. En efecto, mientras el resto del mundo está en problemas, la economía chilena crece y se cuenta con cuantiosos recursos públicos invertidos en el extranjero, que permitirán enfrentar con tranquilidad los efectos de la crisis de Europa y los Estados Unidos. Simplemente sucede que los ciudadanos son más conscientes de sus derechos y piden que ese progreso se traduzca en mayor equidad. Otros, en cambio, son más pesimistas, y piensan que, con estos desórdenes y con la demanda por “más Estado” se ha perdido la oportunidad de alcanzar, en pocos años más, el desarrollo. En todo caso, la discusión radica en cuánto se demorará el país en entrar en la preciada categoría del Primer Mundo. Como se ve, los problemas chilenos son muy diferentes a los de sus hermanos latinoamericanos. Chile sigue siendo un país diferente.